UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA DEL DERECHO A LA MODIFICACIÓN DEL SEXO EN LOS REGISTROS CIVILES ENTRE FRANCIA Y COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS O.P.

**Trabajo de Grado presentado por la estudiante Ludivine Arrieux,
bajo la dirección de la Dra. Cecilia Lorena Barraza Morelle.**

**MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y
CORTES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C, 2020.**

Resumen:

Éste trabajo de investigación realiza un análisis comparativo sobre los requisitos legales de la modificación del cambio de sexo en los documentos oficiales y registros civiles del derecho francés y colombiano. El estudio busca determinar qué elementos considerados por el derecho colombiano pueden ser tenidos en cuenta por el derecho francés, con el objeto que este último pueda permitir mayores garantías de los derechos humanos en materia del reconocimiento del cambio de sexo. Lo anterior, con miras a contribuir con la incorporación de las recomendaciones internacionales y regionales sobre la protección de los derechos fundamentales por parte del estado francés.

Palabras Claves: Derecho Colombiano, Derecho Francés, Derechos humanos, modificación Sexo, Registros Civiles, Transgénero

Abstract:

This investigation carries out a comparative analysis of the legal requirements of the change of sex in official documents and civil registries of French and Colombian law. The study seeks to determine what elements considered by Colombian laws can be taken into account by French laws, in order that the latter may be more protector of Human Rights in the recognition of sex change in order to contribute to the The French State incorporates international and regional recommendations on the protection of fundamental rights..

Key words : Colombian Law, French Law, Civil documents, Gender Modification, Human Right, Transgender

Dedicatoria:

Un agradecimiento especial a mis amigos colombianos que me apoyaron en todo el proceso; a mis padres que creen en mí; a mi directora de tesis que tuvo mucha paciencia; a Juan Felipe y Stanley que leyeron y revisaron mi trabajo. También deseo expresar mi gratitud a la Universidad por haberme dado la oportunidad de perseguir mi sueño.

TABLA DE CONTENIDO :

Introducción :	5
Capítulo 1 -El reconocimiento jurídico del cambio de sexo de las personas transgéneros en el estado civil reconocido como Derecho Humano	10
1.1-	11
1.2 El cambio de sexo como derecho humano reconocido por el derecho regional	16
1.2.1 En el sistema interamericano	17
1.2.2- En el sistema europeo	20
Capítulo 2- Las limitaciones actuales al reconocimiento de cambio de sexo en el marco normativo actual de Francia y Colombia.	26
2.1- El procedimiento colombiano favorable a la modificación de sexo en las escrituras públicas.	26
2.1.1 Una modificación extendida incluso a los menores de edad	32
2.2- La postura más conservadora de Francia frente a la modificación de sexo en las escrituras públicas.	34
2.2.1 La desmedicalización de la prueba como condición a la modificación.	37
2.2.2 La necesidad del juez para solicitar el cambio	39
2.2.3 La modificación solicitada por el menor emancipado aclarada en la legislación francesa.	41
2.3- Las complicaciones de las posturas franco-colombiana de la modificación de sexo frente a la filiación.	42
2.3.1 El reciente fallo de la Corte de Apelación de Montpellier en favor de un reconocimiento del concepto de padre biológico ligado a la modificación del sexo.	43
2.3.2 Un nuevo concepto no reconocido en los registros estatales	44
2.3.3 El reconocimiento colombiano de los dos padres del mismo sexo.	48
Capítulo 3 -Una posible influencia bienvenida del derecho colombiano para garantizar el derecho a la modificación del sexo.	50
3.1- La accesibilidad al notario para el cambio de sexo.	51
3.2- La prueba únicamente con la declaración del demandante	58
3.3- Unas limitaciones para mantener un equilibrio con la intangibilidad	44
3.4- Una posibilidad de extender el derecho a los menores de edad	62
Conclusión	65

Introducción:

La modificación del sexo en el registro civil es un paso clave en materia de derechos humanos para las personas transgénero. La realización de éste derecho se ha convertido en un asunto controversial que desata posturas a favor y en contra que ha impedido su reconocimiento como derecho en varios Estados. Ésta problemática es recurrente en los diferentes sistemas de derechos humanos garantizados por diferentes normas. Colombia tiene su marco jurídico desde 2015, que resulta ser bastante favorable a una modificación simplificada del sexo entendido como error por el notario. En cambio, el marco legal francés está regido por un decreto del 2017, y sus requisitos son bastante estrictos y menos simples de cumplir para los transgénero.

El transgenerismo está definido por la oficina del Alto Comisionario de las Naciones Unidas en Derechos Humanos (2013) como:

la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse a las personas trans o que se refieren a ellas mismas, como mujeres trans cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la

categorización binaria masculino-femenino. El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo.(pág. 3)

La persona transgénero se identifica al género opuesto del sexo atribuido por el nacimiento, y los Estados tienen la obligación de respetar esta decisión puesto que deben aplicar el principio de no discriminación. En Colombia, el transgenerismo está protegido con el ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución y en el caso de Francia, con el derecho a la vida privada y familiar de que trata el artículo 9 del código civil y el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Estos derechos son derechos fundamentales de la persona, y son protegidos por varias herramientas de derechos humanos. Las Naciones Unidas, en su resolución 32/2 de 2016 enumera las normas cuales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la resolución 60/215 de la Asamblea General del 15 de marzo del 2016 y por fin las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 17/19 del 17 de junio de 2011 y 27/32 del 26 de septiembre 2014. Aquellas mismas, protegen las personas transgéneros reconociendo sus derechos, principalmente, gracias al principio de no discriminación, con el fin de respetar su igualdad ante la ley y evitar cualquier discriminación hacia ellos por su condición.

Frente a la motivación de la escena internacional en proteger esta población conocida por sufrir múltiples discriminaciones, se recurrió a un amplio espectro derechos humanos para garantizar una protección eficiente. A partir de que los Derechos Humanos son considerados como derechos inalienables de

todos los seres humanos, sin que influya su nacionalidad, lugar de residencia, religión, color de piel, idioma o toda otra condición. Estos derechos se pueden hacer valer sin discriminación y en condición de igualdad para todas las personas y permiten garantizar la interdependencia e indivisibilidad.

Desde el marco de los derechos humanos las personas transgénero pueden hacer valer sus derechos y aspiraciones como cualquier otro ser humano. Sin embargo, desde el nacimiento mismo, los transgénero nacen con una diferencia natural que se convierte en una discriminación social dado que sexo biológico de “macho” o “hembra” no cumple con los conceptos sociales de los géneros a los cuales, dichos individuos se sienten identificados como “hombre” o “mujer”. Por lo mismo, el registro civil francés y colombiano reconocen el género desde el sexo, el cual está atribuido al nacimiento con los criterios científicos de identificación de los órganos genitales. En otras palabras, el sexo establecido en el registro civil al momento de nacer es el sexo biológico identificado por el médico. El sexo biológico cumple con el género que socialmente está atribuido; el macho se vuelve hombre y la hembra, mujer. Por lo tanto, el registro civil no cumple con las dificultades de identidad que uno puede tener. Es decir, que, al momento de consolidar su identidad, la persona puede identificarse del sexo opuesto al que le fue asignado en su registro civil, en su acto de nacimiento. De esta manera, para corregir este problema, se necesita una posibilidad, un recurso que permita corresponder el sexo con el cual la persona se identifica, en lugar del que le fue registrado en su acto de nacimiento, ya que no cumple con la identidad con la que dicho individuo se define social e individualmente.

Por esta desigualdad desde el nacimiento, las personas pueden crecer con otra identidad, sentirse una “mujer” atrapada en un cuerpo o una visión de la sociedad que la obliga a ser hombre, y viceversa, sentirse atrapado en un cuerpo de mujer cuando se siente “hombre”. Entonces, frente a ésta situación, el Derecho debe hacer cumplir el respeto por los derechos garantizados de las personas trans, haciendo corresponder el registro civil a una realidad social y personal. El Derecho sólo permite legalizar la identificación del individuo, y para eso, es necesario crear un medio por el cual se reconozca esta situación real de la persona, con el fin de asegurar la correspondencia entre el individuo y los datos del Estado.

Sin embargo, este reconocimiento se enfrenta a dos principios claves que, debido a la cierta intangibilidad del estado civil, al interés público y al reconocimiento jurídico del cambio de sexo, convergen en una dificultad jurídica: la intangibilidad de los atributos de la personalidad (nombre, sexo, nacionalidad, la capacidad de goce, el patrimonio, el domicilio y el estado civil). Sin embargo, cambios como la modificación del nombre es posible, o la modificación del domicilio cuales afectan ya la intangibilidad de los atributos de la persona. El registro civil que contiene esta información y atributos son, en teoría, intocables para preservar el orden público como el nombre, sexo, nacionalidad. Estos atributos son dados al momento de nacer por los padres en el caso del nombre, y determinado por el médico en el caso del sexo. Estos atributos son obligatorios y permiten identificar a la persona en la sociedad y hacerla gozar de su personalidad jurídica, es decir, darle obligaciones y derechos.

Entonces, los modelos francés y colombiano buscan un medio para garantizar el equilibrio entre estos principios claves y el Derecho Humano del reconocimiento al cambio de sexo. Se puede notar que el modelo colombiano es mucho más favorable en su forma simplificada de modificación por su procedimiento y reconocimiento.

Por lo tanto, el objetivo del trabajo de investigación es de demostrar cómo el modelo colombiano es fuente de inspiración para el modelo francés, gracias sus criterios favorables y cómo puede servir de modelo para una liberalización de las normas francesas.

En este orden, este trabajo busca responder a la pregunta ¿Cómo el modelo colombiano, progresivo y respetuoso de los Derechos Humanos puede dar unas orientaciones para proponer unas reformas a la ley francesa, y así propender un derecho francés más simplificado y previsible del derecho a cambiar de sexo?

Para contestar esta problemática, se utiliza la forma de la investigación teórico documental: trata de compilar documentos de varios tipos, como doctrina, principios, ensayos que tratan de un tema particular y de hacer un análisis cualitativo de estos para dar una situación concreta y destacar los puntos relevantes al estudio.

De hecho, esta tesis se va a fundamentar sobre las normas vigentes franco colombianas y el contexto de la evolución de los Derechos Humanos actuales en favor de un consagramiento más amplio de los derechos de la población trans. En este punto, se analizan documentos de doctrina y las

sentencias para tratar la evolución del reconocimiento del cambio de sexo que permitieron garantizar una mejor protección del derecho a la vida privada y familiar, en el contexto francés y al libre desarrollo personal, en el sistema colombiano.

Adicionalmente, se tiene en cuenta la investigación descriptiva porque se basa sobre el conjunto de normas existente para tratar el tema. Para apoyar esta idea, se va a utilizar documentos como, por ejemplo, los últimos decretos colombianos y franceses del 2015 y 2017.

En esta misma línea, el trabajo hace parte de una investigación propositiva porque busca comparar las dos formas de implementar un modelo progresista del cambio de sexo y sus implicaciones en materia de filiación, o en materia de menores, en el orden francés gracias a la experiencia colombiana.

Se busca una respuesta moderada de un equilibrio entre el orden público y la garantía del derecho a la modificación del sexo en el registro civil y documentos oficiales.

Para guiar esta investigación, este trabajo se va a dividir en tres capítulos. El primer capítulo, trata de demostrar que el cambio de sexo es fundamental, y es considerado como un derecho humano en los diferentes sistemas legales, al nivel internacional y regional. El segundo capítulo presenta los límites de los marcos jurídicos nacionales francés y colombiano. Finalmente, la última parte trata sobre la posible comparación positiva que puede tener el derecho colombiano sobre el derecho francés.

Capítulo 1 -El reconocimiento jurídico del cambio de sexo de las personas transgénero en el estado civil reconocido como Derecho Humano

El cambio legal de sexo para las personas transgénero es fundamental para permitir el desarrollo en conformidad de la persona, se puede analizar dentro de los marcos teóricos como el derecho a cambiar de sexo para una persona transgénero y porque garantizar este cambio de sexo es fundamental para permitir el respeto de los diferentes derechos involucrados en este mismo cambio de sexo. Por lo tanto, este derecho a verse modificado el sexo, debe también tener en cuenta las diferencias culturales, es decir tener un trato diferente según el sistema que lo protege, y a la vez, dar un margen de interpretación a los Estados, sin violar los derechos humanos involucrados.

Por un lado, para permitir esta interpretación, el derecho internacional se desarrolló con recomendaciones, método menos lesivo con la soberanía de los Estados, actores y garantes de los derechos humanos. Por otra parte, los sistemas regionales pueden generar normas obligatorias para garantizar la modificación del sexo en los documentos oficiales y registros civiles.

1.1. El cambio del sexo como derecho humano reconocido por el derecho internacional

En Derecho internacional, las Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos, junto a su Alto Comisionario de los Derechos Humanos, implementaron el cambio de sexo como una prioridad y un derecho fundamental para permitir el desarrollo de la personalidad del individuo, lo anterior, viéndose reflejado en la periodicidad con la que se discute el tema en las agendas de dichos organismos. En este sentido, los principios de Yogyakarta (2006)

imponen el modelo, en su principio número 3, el cual presenta el derecho al reconocimiento de la personalidad. En éste principio se expone que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Dicho principio enuncia particularmente que la identidad de género está definida por cada individuo para sí, además, es un atributo esencial de la personalidad y es un aspecto fundamento para la autodeterminación de la persona misma, su dignidad y libertad.

Estos principios invitan a los Estados a garantizar éste cambio, si es necesario, para cada persona que lo solicite según el género en el que ella se determina. Los Estados están sometidas a adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí (Principio 3)”. También, en éste tercer principio, las entidades públicas deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquiera otra índole para reconocer la identidad de la persona según su género definido por sí mismo en sus documentos emitidos por el Estado.

Sin embargo, de manera general, los transgénero como parte de la población LGBTI no tienen una protección internacional en especial, lo cual implica la legislación autónoma de cada Estado frente a dicha problemática; no obstante, la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos, en la Resolución 32/2, afirman que el cambio de sexo está protegido por varios otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada, el

derecho a la vida familiar, derecho a la dignidad humana, y sobre todo, el principio de no discriminación (2016, p.1). Estos derechos se relacionan con el cambio de sexo porque ellos mismos expresan que, no se debe excluir o prohibir el derecho de reconocerse para permitir una igualdad con los otros seres humanos, gracias al principio de no discriminación y el derecho a la dignidad humana. Tampoco, se puede limitar discrecionalmente para garantizar el derecho a la vida privada y familiar.

Paralelamente, existe una protección con el artículo 17 del Pacto Internacional de Derecho civiles y políticos cuál es la protección a la vida privada. Este derecho implementa que “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Este mismo derecho es el modelo del derecho a la vida privada y familiar en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, cual permite también proteger los derechos de las personas transgénero. Este derecho es entonces, el derecho principal de protección de los transgénero en la escena internacional. La vida privada permite determinar cómo la persona se define y se comporta en la sociedad conforme a sus deseos personales.

Este derecho a la vida privada fue definido también de manera más explícita, por el Comité de Derechos Humanos, en su caso *Coeriel et al. Vs. Holanda* del 9 de diciembre de 1994, donde afirma que la vida privada es la de

la persona que pueda expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o sola, según el párrafo 10.2 de la dicha sentencia.

Esta aclaración da un reconocimiento al cambio de sexo como parte de la vida privada y habilita las personas transgénero a determinarse libremente con su identidad. La aptitud a poder expresarse libremente permite entonces declarar el cambio de sexo como parte del derecho humano de la vida privada.

También, la preocupación creciente de la escena internacional por la población LGBTI y sus diferentes acciones internacionales implica de manera indirecta el reconocimiento mismo de esa población entonces para permitir este mismo reconocimiento del individuo transgénero, aconseja formalizar la protección, para permitir el desarrollo y evitar una discriminación frente a estas personas. En efecto, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), menciona la protección a la vida privada y familiar, con lo cual, da cabida a la concepción de derechos relacionados con las personas transgénero dentro de éste mismo principio.

Por ejemplo, el Consejo de los Derechos Humanos, en junio 2011, adoptó la resolución 17/19 sobre los Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género. Es la primera resolución que hizo el Consejo en este sentido. Dicha resolución se refirió sobre los actos violentos y de discriminación en todas las regiones del mundo en contra de las personas en razón de su orientación sexual y su identidad de género. En esta declaración, el Alto Comisionario aconseja de manera explícita a los Estados realizar adecuaciones pertinentes para permitir la elección del género determinado por las personas transgénero y si es necesario,

volver a expedir los documentos de identidad pertinentes con dicho género y el nombre preferidos.

Por otra parte, las Naciones Unidas y su Alto Comisionario de los Derechos Humanos redactó un informe A/HRC/29/23 para establecer las buenas prácticas y las herramientas para luchar contra la violencia y la discriminación en contra de la población LGBTI.

Entonces, dicha preocupación creciente demuestra que las personas transgénero como parte de la población LGBTI tienen derecho a ser considerado por cómo se definen. Su identidad se puede reconocer gracias al principio de no discriminación y la protección al derecho a la vida privada. Para reconocer su identidad, es importante que las entidades públicas de los Estados, permitan la modificación del sexo, o mejor dicho de su género, en sus documentos oficiales. El Consejo de Derechos Humanos gracias a su resolución 32/2 del 30 de junio del 2016 preconizan a los Estados el reconocer esta identidad de transgénero, sea frente al cambio de sexo en específico, con el fin de mitigar las afectaciones derivadas de la discriminación hacia dicha población.

Las Naciones Unidas, su Consejo de Derechos Humanos, y su Alto Comisionario de los Derechos Humanos, afirman que el cambio de sexo es un derecho fundamental parte de los derechos de las personas transgénero y que los Estados y su administración, tienen que garantizar el reconocimiento de esta identidad conforme a la identificación misma personal del individuo, haciendo los cambios administrativos necesarios.

El hecho de no tener una norma internacional obligatoria hacia los Estados permite hacer respetar de manera más fácil y tener un consenso internacional más importante gracias a la soft law. Los derechos de las personas transgénero son muy recientes y en la comunidad internacional, varios países podrían ser reacios a participar en este cambio porque no corresponde a sus ideales de Derechos Humanos. Además, la forma de la definición de género no tiene un consenso internacional, ya que no hay una definición uniforme. Por consiguiente, para proteger esta diversidad cultural y no imponer un modelo occidental en la definición de transgénero, puede ser visto como medida más benevolente, el dejar a la apreciación de los diferentes sistemas la interpretación de los derechos de los transgénero frente a sus conceptos culturales.

Ahora, pasando de una escala global a una regional, estos sistemas regionales han tratado de implementar este cambio de sexo como un derecho humano que el Estado tiene que cumplir para preservar el derecho a la vida privada. Sin embargo, dichos sistemas regionales han encontrado impedimentos a las condiciones del cambio de sexo, del reconocimiento en las normas de las personas transgénero de manera más específica y adecuada para cumplir con las culturas regionales de cada sistema.

1.2 El cambio de sexo como derecho humano reconocido por el derecho regional.

En primer lugar, se analiza el derecho al cambio de sexo en el sistema interamericano y el sistema europeo, esto debido a que Colombia pertenece al

sistema de la OEA cuyo órgano jurisdiccional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una segunda parte, se puede tomar en cuenta la protección establecida por el sistema europeo y particularmente por la Convención Europea de los Derechos Humanos con su Corte respectiva, ya que Francia pertenece a éste sistema y tiene que cumplir con estos criterios y la protección concedida por este sistema de protección de derechos humanos.

1.2.1 En el sistema interamericano.

La Corte Interamericana protege el derecho en particular al cambio de sexo o a los atributos de la persona, de su estado civil conforme al principio de la dignidad humana y del derecho a la vida privada. Este derecho al cambio de sexo no está establecido en un derecho especial en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. No obstante, este derecho al cambio de sexo es parte del derecho a la identidad. Este concepto fue desarrollado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las obligaciones de los Estados frente a estos tipos de cambios están esclarecidas por la Honorable Corte, en la opinión consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017 solicitado por el Costa Rica titulada “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”.

El cambio jurídico del sexo está protegido en primera instancia por la dignidad humana. La dignidad humana se desarrolla “en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todas las personas deben ser

tratados como iguales, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-24/17, 2017).

Además, en otras sentencias, la Corte Interamericana declaró que la vida privada, protege el cambio de sexo ya que no se limita estrictamente al derecho a la privacidad, sino que también engloba diversos aspectos de la dignidad de la persona, incluyendo la capacidad de determinar su identidad física como social. (CIDH: caso I.V. Vs. Bolivia, 2016 (párr. 149); caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, 2006 (párr. 194); y caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, 2015).

La Corte expone el derecho a interactuar en sociedad como definido por su mismo según el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal, en el párrafo 88 de la misma decisión.

Estos dos derechos permiten entonces desarrollar el derecho a la identidad; la Honorable Corte por medio del derecho a la intimidad, como lo hizo las Naciones Unidas, protege éste derecho a la modificación del sexo en su registro civil.

Sin embargo, la jurisdicción Interamericana no subordina el derecho a la identidad al derecho a la dignidad o vida privada o el principio de la autonomía de la persona, pero lo relaciona estrechamente, de acuerdo con el párrafo 90 de la decisión.

Además, la Corte precisa que, como parte de la identidad personal, tiene por componente la identidad sexual, que incluye la identidad de género por lo

mismo. La Corte, incluso define este derecho a la identidad sexual y de género como un derecho autónomo. En otras palabras, este derecho es un derecho propio, que no tiene que subordinarse a otro derecho. No se define por otro derecho, sino que se crea un derecho propio, independiente de los conceptos de que derivó. Es decir, el derecho a la identidad sexual y de género se puede valorar y defender en estos términos mismos, sin defender el derecho al libre desarrollo en toda su amplitud. Este derecho a la identidad está también relacionado con el derecho a la expresión protegido por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (2013). En este sentido, la Corte precisa en esta consulta:

La falta de reconocimiento de la identidad de género o sexual podría resultar en una censura indirecta a las expresiones de género que se aparten de los estándares cisnormativos, o heteronormativos con lo cual se envía un mensaje generalizado de que aquellas personas que se aparten de dichos estándares “tradicionales” no contarán con la protección legal y el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de aquellas personas que no se aparten de los mismos (párr. 97).

Por lo anterior, la Corte obliga a los Estados a reconocer el cambio de sexo, como parte de la expresión de la identidad de la persona transgénero en todos los ámbitos administrativos para que el individuo puede gozar completamente de sus derechos y tener la misma protección que cualquier otro ser humano. La identidad de género debe tener “su reconocimiento por parte

del Estado, el cual resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero” (CIDH, 2013, art.13).

Entonces, la Corte Interamericana obliga a los Estados a aplicar y garantizar este derecho a la identidad de género y, por lo tanto, a hacer efectivo éste mismo, acordando los datos de identificación consignados en los distintos registros, así como en los documentos de identidad. En el caso puntual colombiano, se han consignado avances importantes de acuerdo con los requerimientos anteriores; la Corte Constitucional de Colombia (2017), en su sentencia T-675-17, afirma que los documentos de identidad deben estar conforme a las “definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlas.” (Párr. 103).

Esta última parte permite garantizar lo que fue declarado como un derecho propio, un derecho humano protegido por la Convención Interamericana gracias a varios desarrollos de los derechos de dicho organismo. Los Estados tienen una obligación de modificar sus legislaciones, con el fin de asegurar que el derecho a cambiar de sexo sea un derecho fundamental en sí mismo.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva de 2017, permite hacer una recapitulación de la jurisprudencia anterior frente al derecho de las personas transgénero a validar su cambio de sexo sin obligación de recurrir a una intervención quirúrgica o medical gracias a los diferentes conceptos desarrollados por la Corte. Ésta protección supranacional del cambio de sexo a las personas trans, que sean transexual o transgénero, sin

que se imponga la obligación de una práctica médica para poder solicitar un cambio, permite corroborar la naturaleza de Derecho Humano al reconocimiento del cambio de sexo en los registros civiles o documentos de identificación de las personas interesadas. Se afirma el derecho al reconocimiento de sexo también por la garantía que impone el sistema interamericano a los Estados Miembros de la Convención Americana con la protección que ofrece aquella misma, de obligar los Estados a comprometerse a trabajar en una legislación más inclusiva, según el artículo 1.1 de la Convención, y respetar los fallos de la dicha Corte.

1.2.2- En el sistema europeo

Asimismo, el sistema europeo, al igual que la Convención Interamericana no tiene un derecho a la identidad de género explícito, sino que ha sido desarrollado por su jurisprudencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo un desarrollo lento, pero en favor de las personas transgénero.

En un primer momento, en dos famosos fallos del Tribunal, *Cour B. c. Francia*, n° 13343/87 (1992) y *Goodwin c. Reino Unido et I. c. Reino Unidos*, n° 28957/95 y 25680/94 (2002), el Tribunal resolvió que el rechazo de un Estado de modificar el sexo en el plano jurídico, de la “conversión sexual” constituye una violación al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, los Estados pueden establecer las condiciones jurídicas para modificar el sexo en el registro civil y otros papeles administrativos. La Corte pone otro límite al poder del Estado ya que en la decisión *Goodwin* se precisa que, si se puede elegir las condiciones por el Estado, estas condiciones deben analizar las necesidades de las medidas jurídicas frente a “la evolución de la ciencia y

sociedad” (TEDH, 2002, Sentencia 28957/95, p. 4). Es decir, que los Estados deben seguir el progreso social y de pronto, admitir el cambio de sexo en su legislación. Los Estados deben hacer una apreciación en proporcionalidad de los derechos individuales frente al interés público.

Este derecho al cambio de género está ligado a los derechos siguientes: la dignidad humana, vida privada, integridad física, prohibición de la tortura, derecho a un juicio justo y recurso efectivo. Desde el autor, Goodwin, nació en relación con los precedentes derechos, y el concepto de la autonomía personal el cual permite establecer su identidad personal en su vida privada y en sociedad. Una persona puede determinarse gracias a dicho concepto, el cual se acerca del concepto del libre desarrollo de la personalidad.

El Consejo de Europa hizo una recapitulación de la jurisprudencia y de las condiciones al cambio de sexo en su guía “Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre” (2016). En ésta guía, el Consejo expone la jurisprudencia en vigor hasta marzo 2016. Por eso, el último fallo presente en este documento es Y.Y contra Turquía del 10 de marzo del 2015. La Corte expone que el rechazo de las jurisdicciones internas de establecer el cambio de sexo a una persona transgénero no puede condicionar a la operación médica de esterilización cuando ésta misma es rechazada por el gobierno, porque dicho rechazo constituye una violación al derecho a la vida privada y familiar del artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos. (p.13)

En la sentencia Y.Y contra Turquía de la Corte Europea de Derechos Humanos, los Honorables jueces explican que en un caso de un deseo de conversión sexual de una persona que se identifica al otro género que aquel

establecido en su acto de nacimiento, puede recurrir a una conversión sexual, y, que esta conversión no tiene que ser esterilizante. La condición de esterilización no puede ser un límite al cambio de sexo físico de la persona transgénero porque es una violación al derecho a la vida y la privacidad. Los jueces analizan que la legislación turca condiciona el cambio de sexo a la incapacidad de procrear, una infertilidad definitiva. En práctica, esta condición puesta por la ley turca, solo se puede con una intervención quirúrgica, y en nuestro caso, esta cirugía no iba a esterilizar completamente al demandante, y las autoridades negaron esta cirugía al demandante. Subordinar entonces el cambio de sexo a la condición de una intervención esterilizante, que no fue autorizada por el gobierno constituye una violación al derecho a la vida privada.

Asimismo, las jurisprudencias siguientes continuaron esta línea, e incluso flexibilizaron las condiciones. Los jueces establecieron como regla, la no imposición de la intervención médica, lo que permite de establecer como derecho humano, el derecho a la modificación del sexo de las personas transgénero, y no solamente transexuales. En su famoso auto A.P., Garçon et Nicot c. France - 79885/12, 52471/13 et 52596/13, (2016), el Honorable Tribunal expone que el cambio de sexo no se puede someter a la intervención médica por violación al artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos. El uso de este derecho que prohíbe la tortura y los tratos crueles es novedoso por la Corte. La intervención médica del cambio de sexo que impide la esterilización es considerada como una violación a la integridad física de la persona, cual está protegida en el artículo 3 de la Convención. En esta sentencia, los jueces disponen que condicionar el reconocimiento de la identidad sexual de las personas trans a una realización de

una operación o tratamiento esterilizador, o que produce probablemente un efecto de esa naturaleza, que no desea someterse, vuelve a limitar el pleno ejercicio de su derecho a la vida privada consagrado en el artículo 8 de la Convención, a renunciar al pleno ejercicio del derecho a la integridad física garantiza no solamente en esta disposición, pero también en el artículo 3 de la Convención.

Esta jurisprudencia fue confirmada en enero 2019, en la sentencia del 17 de enero de 2019 contra Macedonia. Los jueces invocaron el derecho al reconocimiento de cambio de género en sus documentos, por violación al artículo 8 de la Convención y al artículo 3.

Por consiguiente, la jurisprudencia europea garantiza y reconoce entonces el Derecho a la modificación del género como un derecho fundamental que el Estado está obligado de garantizar en conformidad con la identidad definida por la persona misma. No solo la jurisprudencia europea fue en este sentido, sino también, los órganos del sistema europeo buscaron reconocer este cambio de sexo para las personas transgénero como un derecho fundamental.

En el ámbito de garantizar el dicho derecho al reconocimiento de cambio de sexo, la recapitulación del Consejo de Europa explica que la Corte en varios fallos, requiere que los Estados que sus legislaciones permiten un recurso “práctico et eficaz, et non teórico et ilusorios” (TEDH, 2002, Sentencia 28957/95, p.4). Los jueces les imponen un recurso rápido aparte de los precedentes criterios igualmente para acceder a este cambio y tomar en cuenta la condición particular del demandante. Aparte, el Consejo da como recomendación a los Estados de ser lo más transparente posible cuanto a la posibilidad del resultado

del cambio de sexo. Una de esas herramientas de transparencia puede ser, sino la mejor, el introducir en sus legislaciones nacionales el proceso para obtener el reconocimiento jurídico del género. (Consejo de Europa, 2016, p.21).

Se ha podido observar que el órgano jurisdiccional europeo protege y garantiza el derecho al reconocimiento jurídico del género, entonces gracias a su desarrollo, podemos afirmar que el cambio de sexo jurídico es un derecho humano, declarado y garantizado por este órgano internacional regional.

Aparte de los recientes fallos del Honorable Tribunal, el Comité de los Ministros en su recomendación sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (2010) se enfoca en garantizar y recomendar:

Los Estados miembros deberían adoptar medidas apropiadas para garantizar el pleno reconocimiento jurídico de la reasignación de género de una persona en todos los ámbitos de la vida, en particular haciendo posible el cambio de nombre y de género en los documentos oficiales de un modo rápido, transparente y accesible; los Estados miembros también deberían asegurar, cuando proceda, el reconocimiento y los cambios que correspondan por parte de los agentes no estatales con respecto a documentos clave, como los certificados educativos y laborales.(p.7)

Es decir, los Estados tienen que reconocer el cambio jurídico del sexo, y revisar los documentos oficiales para poner en conformidad aquellos, en el fin de respetar este derecho. Esta recomendación también impide a los Estados de poner en conformidad los documentos que pueden sufrir de cambios indirectos

ligado a este reconocimiento de cambio de género, como la filiación y el matrimonio.

Para concluir, se puede observar que el derecho al reconocimiento jurídico del cambio de género en los documentos oficiales es un derecho fundamental protegido por los sistemas interamericano y europeo. De esta forma, los Estados parte de dichos sistemas tienen que respetar, garantizar y proteger este derecho, establecido como fundamental por los órganos jurisdiccionales regionales y por recomendación de las naciones unidas.

Capítulo 2- Las limitaciones actuales al reconocimiento de cambio de sexo en el marco normativo actual de Francia y Colombia.

Como se ha visto, el reconocimiento de cambio de género es un tema actual y complejo para las instituciones estatales. Los sistemas regionales americano y europeo garantizan unos criterios mínimos; es decir, unos derechos mínimos que las naciones deben contener obligatoriamente en su normatividad. Estos derechos deben permitir el cambio de sexo. No obstante, estos requisitos son determinados particularmente por los mismos Estados en su norma nacional. Es decir, que, si los sistemas de defensa de Derechos Humanos permiten garantizar un mínimo, no pueden imponer del todo los requisitos y el procedimiento para que el Estado reconozca éste cambio de sexo.

Asimismo, los Estados de Colombia y Francia tienen sistemas regionales y normas internas y requisitos diferentes, como se verá a continuación la

legislación colombiana es más favorable a reconocer los cambios e implementarlo en los registros civiles.

2.1- El procedimiento colombiano favorable a la modificación de sexo en las escrituras públicas.

Primero, la Corte Constitucional de Colombia presenta en su sentencia de tutela 099 de 2015, el concepto sobre la base de la persona, protegiendo asimismo las mujeres y los hombres transgénero. Esta sentencia trataba de una mujer transgénero que defendía que no podía cumplir con el servicio militar por su condición de sexo, porque, el servicio militar en Colombia es obligatorio únicamente para los hombres. En esta sentencia, la Corte establece como personas transgénero gracias a la definición de los principios de Yogyakarta sus mencionados, a aquellas que:

Tienen una vivencia que no corresponde con el sexo asignado al momento de nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es femenina, dicha persona generalmente se auto reconoce como una mujer transgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino y la vivencia de la persona es masculina, dicha persona generalmente se auto reconoce (sic) como un hombre transgénero. (Taula 2, Sentencia T- 099, 2015)

Además, en esta misma sentencia, la Corte acuerda al Estado que las personas transgéneros son víctimas principalmente de barreras también respecto al cambio de nombre y sexo en el registro civil e identificación , además

que ordena al Ministerio si no lo ha hecho todavía en la Ley de Identidad y Género de “diseñar un protocolo efectivo de cambio de identidad y de sexo en los documentos oficiales para los ciudadanos transgénero con pleno respeto a sus derechos, sin intromisiones físicas ni psiquiátricas que patologizar su opción sexual.” (Párr.106) La Corte insiste por otra parte que no se debería hacer un procedimiento de verificación por una jurisdicción voluntaria, notarial o médica para asegurar la modificación de sexo en documentos oficiales, sino esta verificación, es constituyente de una discriminación, considerando el transgenerismo como una enfermedad sexual.) Esta postura de la Corte Constitucional Colombiana no es un vuelco a la jurisprudencia, sino una confirmación de su postura favorable a garantizar los derechos de los trans. La Corte Colombiana siempre garantizó sus derechos en particular al derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho garantizado en el artículo 16 de la Constitución, “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico y el derecho a la dignidad humana.”. El derecho al libre desarrollo interpretado por Colombia es el mismo que el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que dicha Corte regional se inspiró de la definición de Colombia para extender los derechos a las personas trans. Este derecho puede ser entendido además según la sentencia de tutela n°675/15 de la Corte Constitucional de 2017 en el contexto de identidad de género “el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás” (párr. 8); éste párrafo permite una garantía a las diversidades de género y confirma la postura

jurisprudencial de que la modificación no se puede sólo limitarse al nombre en caso que lo desea la persona sino también al sexo. El Estado no puede ingerir en sus decisiones para respetar la dignidad humana de las personas.

Con respecto a lo anterior, se puede observar que el derecho del artículo 14 permite proteger a los derechos de los transgénero en Colombia. Como dicho anteriormente, la sentencia T-099/15 no es un vuelco jurisprudencial, sino una confirmación. En efecto, la Corte hizo varios pasos para garantizar los derechos, incluso frente específicamente a la modificación del sexo en los documentos de identificación reconocidos por el Estado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional siguió garantizando este derecho a ver modificando su sexo en el registro civil. Asimismo, en la sentencia emblemática T-063/15 consiste en una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el párrafo “modificación del registro civil por cambio de sexo de personas transgénero” declara que el medio menos lesivo de corrección se debe implementar. El recurso a la jurisdicción voluntaria no puede ser la vía obligatoria del cambio cuando existe una vía notarial de corrección, cual es un método menos lesivo para corregir el sexo en el registro civil.

Al constatar la existencia de un medio alternativo que cuenta con cobertura legal, es menos lesivo de los derechos fundamentales y reviste idoneidad equivalente para alcanzar los fines constitucionales que se satisfacen con el proceso de jurisdicción voluntaria, la Sala encuentra que la obligación impuesta a la accionante de acudir a este último mecanismo para realizar la corrección del sexo inscrito en el registro civil, es una medida innecesaria y

gravosa para sus derechos, y que además representa un trato discriminatorio en relación con el que se dispensa a las personas cisgénero, quienes pueden corregir este dato mediante escritura pública.

La Corte Constitucional asegura los recursos legales que sean los menos discriminatorios e intenta no menoscabar los derechos de las personas trans, permitiendo lograr dicha modificación de la manera más simple y eficaz posible haciendo uso de los recursos disponibles para el procedimiento legal. Cabe destacar que son pasos muy grandes los que dio la Corte Colombiana para defender a los derechos humanos de los transgénero.

Sin embargo, la jurisprudencia no es una fuente total, la fuente normativa, la ley tiene un rango superior en la jerarquía constitucional. Debido a la postura actual e innovadora de la Honorable Corte, el Estado sigue la línea favorable de la jurisprudencia colombiana. Por consiguiente, la institución estatal hizo un decreto reglamentario 1227 del 4 de junio de 2015 para garantizar los derechos de las personas trans y organizar la modificación del cambio de sexo y sus requisitos.

Este decreto implementa los requisitos para solicitar el cambio de sexo cuales son según el decreto 1227 del 2015, en el artículo No.2.2.6.y 12.4.4. titulados “Requisitos de la solicitud”, el nombre del notario a quien se hace la demanda de la modificación, y el nombre y la cédula del solicitante. Para solicitar, se pide como documentos únicamente una copia del certificado de nacimiento, una copia de la cédula de ciudadanía, una declaración bajo la gravedad de juramento la cual debe contener la voluntad de cambiar de sexo en la casilla del registro civil refiriéndose a construcción sociocultural correspondiente a su

identidad de género. Este decreto detalla por aparte que no se puede solicitar para convalidar la modificación ningún documento medical o prueba adicional de manera general para permitir una aprobación de este cambio.

Este último detalle permite una modificación simplificada y confirma la posición jurisprudencial de la Corte Colombiana frente a no definir el transgenerismo como una enfermedad sexual y permite evitar discriminaciones para garantizar su derecho a la modificación de las escrituras públicas.

Los criterios generales del decreto son muy favorables a la modificación. En efecto, la vía más fácil de cambio en la registraduría pública es el método que avala el decreto sobre las personas transgénero. El recurso permite hacer este cambio de manera rápida, eficaz y segura, por ser la vía notarial que posee un poder estatal reconocido. Además, la ausencia de pruebas adicionales evita una selección que podría perjudicar y discriminar, según los notarios, el reconocimiento del cambio de sexo. De manera que, con este recurso se brinda confianza y se asegura una dignidad humana, garantizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad: dejar la persona hacer sus elecciones hasta que no sea en contra de los demás o de lo legal.

Sin embargo, aunque la legislación actual permite una modificación por un método legal simplificado, este derecho tiene todavía unas limitaciones salvaguardias para asegurar el orden público con la estabilidad de los atributos de la personalidad. Conforme al decreto 1227 del 2015, en el artículo No. 2.2.6. y 12.4.6, intitulado Límites a la corrección del componente sexo en el Registro del Estado Civil, la modificación de sexo se puede hacer hasta dos ocasiones en

la vida de la persona y con un espacio mínimo de diez años entre las solicitudes. Estos límites permiten asegurar una estabilidad al orden público y a las escrituras públicas para evitar los problemas de identificación. Además, la posibilidad de dos veces permite al final a la persona de identificarse socialmente y complemente con una margen de error, o a contrario, quedar en su derecho de tener la identificación propia y correspondiente. Esta posibilidad puede ser vista como un esfuerzo también de garantía de la parte del Estado de asegurar la posibilidad de la elección e identificación propia respetando el derecho al libre desarrollo. El límite de tiempo también permite ver a largo plazo si la persona se identificó de manera diferente y segura durante su declaración al género que solicita, cual es la única forma de convalidar, aprobar o rechazar esta modificación de sexo, cual es poco probable por ser una declaración sin necesidad de prueba.

Se puede observar también otra ventaja en las disposiciones de este decreto de permitir un cambio en dos ocasiones, en particular de los menores, que se pueden todavía construir a lo largo de su vida, y que se identificarán de pronto de manera diferente a en otras etapas de sus vidas, y que confirman o no la identificación de género que tienen. En este sentido, la sentencia de tutela n°675/15 de la Corte Constitucional de 2017 viene a consolidar éste derecho a la modificación del sexo incluso para los menores.

2.1.1 Una modificación extendida incluso a los menores de edad

En la sentencia n°675/15 de la Corte Constitucional, se convalida el poder y deber del Estado de garantizar la modificación del registro civil. En esta

sentencia, una madre de un menor de edad solicitó con un notario de Bogotá una modificación del sexo de su hija, mujer trans, en su estado civil. Sin embargo, la demanda fue rechazada por ser una menor de edad. A pesar de eso, la Corte fue bastante favorable a los derechos de modificación porque aseguró que, en varias sentencias constitucionales, el menor es capaz de tomar decisiones para sí mismo en caso de aborto legal, de cirugías estéticas y definir su sexo en caso de personas intersex.

Además, anteriormente a esta sentencia, en una sentencia T-498/17, el juez reconocía el derecho a la persona menor de edad de solicitar un cambio según varios criterios: i) la voluntad de los padres y del menor, ii) el criterio profesional por parte de terceros, iii) la cercanía a la mayoría de edad y iv) la ponderación de la trascendencia de la decisión a tomar, analizando sus efectos secundarios y la posibilidad de revertirla.

El Registro Civil debe cumplir con la identidad de género que la persona reconoce para sí misma, incluso cuando es pedida por vía notarial. La demanda había sido rechazada debido a que obligaba a la persona a solicitar una modificación por medio jurisdiccional por ser menor de edad y evaluar su capacidad a entender las consecuencias de este cambio en el registro civil.

No obstante, la Corte falló al contrario, y abrió el derecho a la modificación porque permite a los menores de edad de solicitar con un notario éste cambio al igual que los adultos. La complicación de la modificación menoscaba por sus dos enfoques diferenciales, de ser menor de edad, y persona trans. La Corte declara en este hito:

Por lo anterior, al existir un claro reconocimiento y protección, por parte de la jurisprudencia de esta Corte, a la autonomía que, en algunos casos y de manera limitada, tienen los menores de edad para construirse una identidad propia cuando se ha acreditado la existencia de un consentimiento verdaderamente libre e informado, deberá dársele prioridad a la declaración de voluntad que lleve a cabo el niño o adolescente, cuando se cumplan los presupuestos que jurisprudencialmente han sido fijados para ello (Sentencias T-498 y T-675 de 2017) de manera que no se restrinjan irracionalmente los derechos de este grupo de sujetos de especial protección constitucional, en razón de su edad e identidad de género, a exteriorizar esta última cualidad con la que se identifican y se realizan, persiguiendo materializar su identidad y personalidad jurídica. (párr. 67)

Los menores de edad tienen incluso los mismos derechos a verse reconocido su cambio en la escritura pública de sus datos de identificación, incluso cuando se trata de cambio de sexo. Limitar este derecho no se puede justificar por la situación particular de ser menor de edad, sino que el derecho al libre desarrollo y a la dignidad humana prevalecen sobre a su condición especial.

La jurisprudencia colombiana es muy favorable y sigue siendo innovadora y protectora de los derechos LGBTI como se puede ver aquí, incluso en casos que podrían ser polémicos. Es un motor de protección de derechos humanos y de garantía a la modificación del sexo.

Al contrario, otros países pueden tener posturas muy diferentes frente a este mecanismo de cambio de sexo, como se ha dicho anteriormente, los

requisitos de la modificación y documentación es a mano de los Estados mismos. Por eso, Francia tiene una postura completamente diferente a Colombia.

2.2- La postura más conservadora de Francia frente a la modificación de sexo en las escrituras públicas.

Después de la condena de Francia por el Tribunal Europeo en el fallo A.P, Nicot y Garçon contra Francia del 6 de abril 2016, Francia tuvo que adecuar su legislación a la prohibición de someter el cambio a una esterilización o una operación de las partes genitales de la persona solicitante de este procedimiento. El juez francés pedía a los solicitantes del cambio de sexo realizar una intervención quirúrgica para poder cambiar su estado civil en los documentos oficiales de identificación. Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos falló en contra de la postura francesa y explica que el requisito de hacer una operación de éste tipo viola la prohibición de los tratamientos inhumanos enunciado por el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Francia tiene una concepción más estrecha del derecho a garantizar el derecho a la modificación del sexo en los registros civiles para proteger la intangibilidad del estado civil, el principio francés parte del orden público.

No obstante, gracias al derecho a la vida privada y familiar protegidos por el Código Civil francés en el artículo 9 y 11 del Código Civil, se puede modificar el sexo en el registro civil.

Con el fin de estar en conformidad con la sentencia europea, el gobierno francés emitió una ley, el 18 de noviembre de 2016, titulada ley de

modernización de la justicia del siglo XXI complementada por el decreto de aplicación del 29 de marzo de 2017, que trata propiamente del cambio de registro civil de las personas trans. Estas dos normas permiten implementar los nuevos requisitos pedido por las autoridades estatales francesas para solicitar la modificación del sexo en su estado civil.

Estas reformas permitieron reescribir los artículos 61-5 del Código Civil y 61-6 del mismo Código. Estos artículos exponen que el análisis propio de la evaluación del cambio de sexo se hace gracias a una reunión de hechos, tales como que la mención del sexo en su estado civil no cumple con el sexo con el cuál se presenta o se es conocido, y por ende, se puede solicitar la modificación del mismo. Los criterios son que la persona debe presentarse públicamente con el sexo reivindicado, conocido con este sexo por sus familiares cercanos, amigos, o profesionales, y que anteriormente haya realizado la modificación de su nombre para corresponder al sexo solicitado. Sin embargo, la circular es muy clara respecto a los criterios y estos son acumulativos pero no obligatorios, es decir que toda otra prueba que no sea parte de esta lista puede ser aceptada. La ley no dispone de una lista exhaustiva al igual que estos índices tampoco son obligatorios, sino que pueden ser parte de una mera indicación. Estos criterios son sólo una indicación de la pertenencia al sexo reivindicado por la persona misma y posteriormente por el ámbito societal que permite admitir el cambio de sexo.

Por otra parte, gracias a la reforma del Código Civil, el artículo 1055 del Procedimiento Civil presenta el procedimiento para solicitar el cambio de sexo según las normas francesas.

La demanda se debe hacer ante el Tribunal de Gran Instancia, tribunal de asuntos civiles en Francia, por medio de un procedimiento simplificado que no tiene la necesidad de exigir pruebas como ocurre en un proceso contencioso. Éste procedimiento no impide la obligación del abogado, y se puede hacer con la representación del mismo o en otros casos, sin su participación. En el contexto francés se observa entonces que la modificación del sexo sigue siendo parte de un proceso judicial.

Entonces, podemos analizar varios ámbitos de la ley francesa y ver cómo puede asemejarse o diferenciarse de la norma colombiana para admitir el cambio de sexo.

2.2.1 La desmedicalización de la prueba como condición a la modificación.

Con relación a lo anterior, la admisión de la modificación del sexo se hace con un conjunto de hechos que hacen parte de la prueba para autorizar la misma. Sin embargo, éste cambio no se puede condicionar a una medicalización para justificar la demanda. En este artículo, el legislador pronunció que el hecho de no haber realizado intervenciones médicas de modificación de sexo no puede constituir una razón de rechazo a la demanda de modificación en el estado civil.

Este punto tiene entonces una similitud a la legislación colombiana porque, una persona puede pedir una modificación sin haber tenido que sufrir

una operación, sino que la modificación se hace por con convicción propia. Aunque, los documentos en caso de intervención médica para cambiar de sexo pueden ser admitidos en todo caso, pero no pueden ser parte obligatoria de la constitución de la prueba, sino que es únicamente un factor en favor del cambio en el registro civil solicitado por el demandante.

Sin embargo, este es el único punto de coincidencia de la legislación francesa y colombiana ya que los requisitos de la ley colombiana son más flexibles debido a que la documentación para apoyar la demanda se solicita únicamente por declaración bajo juramento. Al contrario, podemos ver que en Francia, se solicita pruebas aparte de la declaración de la persona para aprobar su identificación societal y propia al sexo solicitado en la demanda. Estas pruebas del sistema francés pueden por ejemplo, consistir en una demanda previa de modificación del nombre, testimonios del entorno profesional o familiar respecto a la identificación de la persona o toda otra prueba.

Esta exigencia de prueba puede, por una parte, comprometer la demanda, sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos en un fallo del Y.Y contra Turquía del 10 de marzo de 2015 afirma que no se puede preguntar la pertenencia sexual del demandante debido a que es una libertad que se analiza como un elemento principal de su derecho a la autodeterminación. En otras palabras, este fallo explica que la sociedad no es el ente que decide el sexo de identificación de la persona, sino la persona para ella misma, y el juez sólo permite reconocer esta identificación de manera legal por medio de un cambio

en el estado civil. Además, para confirmar esta postura europea, el Defensor de los Derechos, institución francesa de protección de Derechos Humanos, publica en su opinión MLD-MSP-2016-164 del 24 de junio del 2016, que la evaluación del comportamiento de la persona no puede constituir estereotipos de género y/o rechazar las demandas porque la persona no sería suficientemente “mujer” o “hombre” según percepciones que serían parte de prejuicios sociales o personales. Esta recomendación hecha por el Defensor es una salvaguardia frente a justificaciones que podrían ser hechas por el juez respecto a la modificación del sexo. No obstante, no se determina cuáles son las pruebas que realmente pueden sustentar la demanda, lo cual, podría crear una diferencia entre las demandas según la jurisdicción territorial donde se solicita, si una es más favorable que la otra.

Aparte de esta diferencia substancial entre el derecho colombiano y francés de tener que dar pruebas como requisito de la demanda, una diferencia principal y fundamental entre estos dos sistemas se basa en el ámbito procesal, porque, en el ámbito francés, la demanda se hace con un proceso judicial y no por oficio público, como lo es el medio notarial en Colombia.

2.2.2 La necesidad del juez para solicitar el cambio.

Al contrario del decreto reglamentario colombiano, el decreto francés impide como procedimiento, la demanda ante el juez. Este procedimiento somete entonces al demandante a más procedimientos para convencer al juez de admitir su demanda.

Sin embargo, para simplificar el procedimiento judicial y preservar el derecho a la vida privada y familiar del solicitante, el legislador francés garantiza ciertas condiciones. La primera es el recurso al procedimiento gracio, el cual facilita la demanda, y, evita las dificultades de un proceso contencioso respecto a la prueba y la oficina pública. Posteriormente, en caso de debate, el mismo se hace en la Sala de consejo, en privado, y la decisión no puede expresarse en público, para preservar al máximo el derecho a la vida privada.

Adicionalmente, el solicitante no necesita ser representado por un abogado durante su proceso, lo anterior, para facilitar la demanda. Sin embargo, lo puede solicitar y obtener la ayuda jurisdiccional pero no es un proceso obligatorio por derogación al proceso general civil francés.

Asimismo, durante la demanda, el solicitante puede pedir la modificación de su sexo en su estado civil conjuntamente a la modificación de su nombre, si la demanda no fue hecha anteriormente.

Para garantizar este cambio, el fiscal general impide a las autoridades operar el cambio antes los quince días de publicar la decisión. Este tiempo, sin embargo sigue siendo más largo que el plazo colombiano porque según el decreto 1227 del 2015, en los artículos No. 2.2.6.y 12.4.7. sobre las Reglas de la corrección, se le impide al notario expedir la modificación de la escritura pública en los cinco días hábiles siguiente a la solicitud. La modificación es entonces más rápida en el contexto colombiano.

Otra dificultad ligada al hecho que sea un juez quien determine la modificación del cambio de sexo, se evidencia en el artículo 61-6, el cual hace

referencia al hecho de que el solicitante debe probar su consentimiento libre y consciente de la modificación de su sexo. Entonces, según Philippe (2018) esta norma de referencia es normalmente, en derecho francés, lo que se aplica en caso de una prueba entre un médico y su paciente (lo anterior sugiere una prueba médica como requisito para hacer efectiva dicha solicitud). Estos términos no deberían aplicar para poder solicitar el cambio, ya que, en caso de un resultado anormal, puede crear confusión en el juez y parcializar la decisión del mismo.

Aunque la legislación francesa y colombiana se distinguen en varios puntos, las dos legislaciones tratan de la misma manera el ángulo de los menores de edad.

2.2.3 La modificación solicitada por el menor emancipado aclarada en la legislación francesa.

En el texto francés, el artículo 61-5 del Código Civil dispone que las condiciones y los requisitos para la solicitud son aplicables para el menor de edad pero únicamente en estado de emancipación. Es decir, que la solicitud, al igual que en la legislación colombiana solo se puede hacer por una persona mayor o un menor que ejerce la plenitud de sus derechos. Como consecuencia de lo anterior, al igual que en Colombia, el proceso de modificación de sexo para menores de edad podría ser rechazado por el juez por su condición de menor de edad según la ley francesa. A diferencia de la jurisprudencia colombiana, se puede observar que el juez francés es más conservador y hasta ahora, no se ha

tratado el caso de la demanda de un menor, o de una contestación de la ley con un mecanismo constitucional, por ejemplo, frente a los derechos de los menores. Por consiguiente, es posible inferir que dicho menor es también considerado incapaz según la ley francesa. Respecto a este punto de derecho, no hubo hasta ahora ninguna jurisprudencia que trate este ámbito de la modificación del sexo en el registro civil ni tampoco una circular o documento oficial para indicar el proceso en caso de menores de edad.

Este ángulo es un punto común y diferenciador entre ambas jurisprudencias, debido a que en el 2017 la Corte Constitucional Colombiana y su jurisprudencia falla a favor de la demanda hecha para la modificación del sexo de un menor de edad en Colombia con el notario.

No obstante, el punto de los menores no es el único punto problemático creado por estas nuevas condiciones de solicitud y requisitos para obtener la modificación del estado civil, en efecto, las normas actuales pueden crear conflictos respecto a la filiación en caso de un nacimiento natural y biológico por una persona transgénero en la transcripción del registro civil.

2.3- Las complicaciones de las posturas franco-colombiana de la modificación de sexo frente a la filiación.

Otro punto interesante que se pueda dar es respecto a la afiliación de las personas transgéneros. En este punto, la legislación francesa y colombiana son también distintas ya que en Colombia, se permite admitir en el registro civil el nombre de dos padres o dos madres, es decir dos personas del mismo sexo para

un niño, aunque en Francia, este proceso es solo permitido actualmente en caso de adopción por la otra persona.

Sin embargo, con la desclasificación de la transexualidad como patología, y ante al no hacer uso de una intervención quirúrgica, se puede observar un nuevo fenómeno debido a que las personas transgénero pueden conservar sus gametos originales, y entonces reproducir biológicamente de manera natural, sin tener que pasar por un proceso de acompañamiento médico u optar por una adopción. No obstante, el proceso de acompañamiento médico asistido en la norma francesa está prohibido a las parejas homosexuales, lo que hace que hasta ahora no haya habido problema en el mantenimiento de la filiación en los registros civiles. La única forma legal es para ser padres es la adopción.

De acuerdo con lo anterior, como se puede analizar, una mujer trans puede con una mujer cisgénero, por ejemplo, o un hombre trans con un hombre cisgénero, reproducirse de manera natural, sin pasar alguno de los procesos enunciados dicho anteriormente. Entonces, eso crea un problema frente a la filiación en Francia porque en los registros, no es posible tener dos madres o dos padres biológicos. Como consecuencia, la modificación del sexo en el registro civil tiene muchas más implicaciones en el derecho francés actualmente.

2.3.1 El reciente fallo de la Corte de Apelación de Montpellier en favor del reconocimiento del concepto de padre biológico ligado a la modificación del sexo.

La filiación establecida anteriormente a la modificación del sexo no tiene ninguna incidencia según la ley francesa, sin embargo, dicha legislación francesa no aclara en caso de una filiación posterior a la modificación del sexo.

Pero, este vacío jurídico no podía quedarse sin resolver, por consiguiente, el 14 de noviembre de 2018, la Corte de Apelación de Montpellier falló en favor de la mujer trans, madre de un niño nacido después del cambio de sexo en su estado civil. La Corte creó entonces el concepto de padre biológico, que según Marine Brillé-Champaux, (2019), no es un concepto nuevo pero su empleo en el registro civil fue una medida implementada para intentar resolver dicho vacío jurídico.

La Corte buscó la posibilidad de dar un concepto neutro de la noción de padre o madre para permitir establecer una filiación idónea.

Sin embargo, éste concepto pone en evidencia varias problemáticas al momento de consolidar su sexo en sus documentos de identificación, debido a que no es reconocido oficialmente y puede discriminar a la persona transgénero frente a la modificación del sexo.

3.3- Algunas limitaciones necesarias para mantener un equilibrio con el principio de intangibilidad.

Si es cierto que, en el derecho francés existe una intangibilidad como principio, es decir, la indisponibilidad de los cambios para los atributos de la persona, eso no significa que dicha intangibilidad sea inmutable. Así mismo, se tiene que buscar un equilibrio para garantizar el orden público, pero también la protección de los derechos de las personas transgénero.

El modelo francés puede en éste sentido, inspirarse en la posición colombiana que, aunque quita la necesidad de acceder al juez, impone unos límites a estas demandas de cambio de las escrituras públicas respecto al sexo.

El derecho colombiano implementó unas salvaguardias para evitar los abusos dentro de dicho cambio. En efecto, en el decreto 1227 de 2005, los cambios sólo se pueden solicitar dos veces en su vida, y al mínimo con un espacio de 10 años. Esta limitación permite preservar este principio tan importante de la intangibilidad, pero también deja una mutabilidad. La posibilidad de solicitar el cambio dos veces en su vida también permite una seguridad al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que, si el cambio solicitado por una razón interna a la persona quiere cambiar, sólo se puede regresar a su género, inscrito inicialmente en el registro civil. También, este límite se puede justificar porque en el derecho colombiano, el reconocimiento del sexo es binario. En otras palabras, en el derecho colombiano solo existe el sexo masculino y femenino, al igual que en el sistema francés. El límite de dos veces para el cambio restringe finalmente la posible modificación, porque el regreso a su sexo dado por el médico es la única opción posible, lo que permite asegurar una intangibilidad de los atributos.

Por otra parte, la posibilidad de modificación de sexo en dos oportunidades y la declaración bajo juramento de la construcción socio cultural limita en sí misma la identificación de la persona. Según lo anterior, una persona que hizo todo el proceso para hacerse reconocer del otro género se identifica en sociedad con éste mismo, al momento de revertir la decisión, la segunda demanda sería rechazada por la lógica de la solicitud. Si una persona se identifica a un sexo determinado, socialmente es difícil a largo plazo cambiar y revertir su situación, por las pruebas presentadas en primera instancia.

Por esta misma razón, la limitación de tiempo justifica también, dado el caso, la posibilidad de solicitar por una segunda vez el cambio, ya que un plazo de diez años permite realmente a la persona identificarse socialmente con el género solicitado en primera instancia. Este tiempo permite la reflexión del individuo para saber si realmente quiere de nuevo hacer el proceso.

En Francia, el cambio de sexo parece irreversible, es decir que la voluntad, la autonomía personal se encuentra limitada por este principio. Eso se puede explicar porque el juez tiene que encontrar las pruebas, validarlas y por consiguiente, una segunda modificación que implique regresar al sexo asignado originalmente, podría parecer en contra de la solicitud inicial del demandante.

El derecho colombiano supo encontrar un intermedio, el cual puede justificar la limitación con un mantenimiento de la intangibilidad, dejando las puertas abiertas a una garantía importante del derecho al libre desarrollo, con criterios claros y evidentes por el sistema de reconocimiento civil que tiene la legislación colombiana.

Además, dichas legislaciones garantizan la posibilidad de solicitar de nuevo un cambio en su limitación, lo que permite empoderar este derecho a la autonomía personal, pero también permiten a los menores de edad, que muchas veces no son considerados por su “consentimiento libre e informado”, como sería escrito en la legislación francesa a acceder al derecho al libre desarrollo de su personalidad. El menor de edad no dispone de sus derechos plenamente, sino que está sometido al consentimiento de sus padres, por consiguiente, no puede ejercer sus derechos de manera directa. No obstante, la posibilidad de dejar una

segunda opción podría permitir a los menores de edad, considerados inaptos para decidir sobre su vida y su libre desarrollo, en primera instancia, para que, dado el caso de incurrir en una modificación posterior, se produzca dentro de un plazo considerable y de manera definitiva.

El derecho francés podría entonces inspirarse en el derecho colombiano en aras de reglamentar una segunda modificación del sexo con razones de justificadas, así como en Colombia. El Estado francés también tiene un sistema binario de género, por consiguiente, la posibilidad por ejemplo de implementar el sexo neutro no es posible, a diferencia de Alemania u otros países donde ya entró en vigor. Lo anterior sugiere entonces, que la preservación del orden público podría ser entonces respetada por los criterios establecidos. Colombia tiene éste mismo principio, y por esta comparación, se podría ver un camino intermedio con el fin de crear limitaciones razonables que permitan, en todo caso, hacer un uso razonable de la posibilidad de modificar el género en los documentos de identificación oficiales. Además, el término de error en la calificación notaria, podría difícilmente dar lugar a una segunda vez, ya que, un cambio a posteriori de la modificación realizada en primera instancia tendría un problema de definición en sí mismo. Estos límites podrían entonces aplicarse en Francia y permitirían garantizar una preservación de los derechos humanos de manera muy amplia, en comparación con la legislación actual.

Sin embargo, como se vio anteriormente, las limitaciones colombianas podrían dar una posibilidad de expresión más importante a los menores transgénero, lo que también tienen derecho a ser considerados y ver este derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía progresiva, o en el

caso francés, a la vida privada y familiar y a verse defendido para poder establecer la modificación del sexo en el registro civil.

2.3.2 Un nuevo concepto no reconocido en los registros estatales.

Según el Doctor en derecho civil, Victor Deschamps, entrevistado por Marina Brillé-Champaux, en su artículo sobre la noción de padre biológico (2019), afirma que la primera dificultad que se puede presentar, es que el estatuto de padre biológico puede menoscabar el derecho a la vida privada de la persona transgénero debido a que dicho título sólo se instalaría en el caso de padre transgénero, ya que, los demás cisgéneros seguirán con el título de madre y padre del registro civil, lo que indica que durante el procedimiento y la modificación del sexo en el registro civil se está protegido, y como consecuencia, podría ser una amenaza posterior a la modificación al derecho a la vida privada.

La segunda dificultad puede ser también la implicación misma que simboliza el concepto mismo de padre y madre según el autor. La noción de padre y madre hace referencia no tanto al lazo biológico del niño sino a los lazos jurídicos legalmente establecidos entre ellos. Entonces, si se hace referencia al concepto de padre biológico, podría generar confusión en la acción propia de la filiación, ya que el lazo de derecho que debe ser legalmente establecido y la parentalidad que es solo un lazo de hecho que tiene que ser probado para establecer la filiación. Ésta confusión podría generar entonces una acción de discriminación debido a que el primer lazo tiene que ser probado frente al segundo, y contestaría una noción que no tendría prueba.

2.3.3 El reconocimiento colombiano de los dos padres del mismo sexo.

Desde 2015, la Corte Constitucional Colombiana reconoce la posibilidad de inscribir el nombre de dos madres o dos padres en el registro civil. La Corte ha fallado para proteger la dignidad humana y el interés superior del niño, en este caso. La Registraduría está obligada a implementar un formato que permita que tanto un hombre como una mujer figuran como padre o madre de un menor, es decir, que el documento oficial puede tener dos madres o padres para garantizar los derechos de los menores.

La sentencia SU 696/15 obligó a la registraduría nacional a incluir dos casillas destinadas a los padres en los documentos oficiales. Además, la sentencia de tutela T-196/16 confirmó la postura colombiana acerca del interés superior sobre el niño, con lo cual, se debe otorgar el apellido de las dos madres y establecer la filiación en el registro civil. Como se puede observar en éste caso, la filiación con una pareja del mismo sexo es posible en Colombia para preservar el interés superior del niño.

Frente a eso, es evidente que en el caso de un nacimiento de una pareja constituida por una persona transgénero, en el contexto posterior a la modificación del sexo, tiene por consecuencia la creación de una pareja homosexual, con lo cual, no es posible resolverse de la misma manera. No obstante, la postura colombiana sigue siendo menos discriminatoria que la francesa por el reconocimiento de los padres, incluso cuando son del mismo sexo. En efecto, el reconocimiento de la pareja como segunda madre o padre quita la dificultad en el caso de los transgénero, porque se podrían registrar los dos como madre o como padre en Colombia. A diferencia de Colombia, en

Francia no es posible, con lo cual, subsiste la dificultad en éste caso, y el reconocimiento se puede convertir en un requerimiento necesario para no discriminar la persona transgénero en su derecho a ser padres, pero también a su reconocimiento al cambio de sexo, el cual, se podría volver una negación después del reconocimiento.

El hecho de hacer prevalecer el interés superior del niño permite preservar y no discriminar el derecho a la paternidad en el caso de las personas transgénero, debido a que la filiación se podría establecer conforme al sexo con el que se identifica, y que el Estado debe velar por la modificación, garantizando así los derechos del padre transgénero.

La modificación del sexo en Colombia tiene entonces menos consecuencias ya que la jurisprudencia ha resuelto los requerimientos necesarios para garantizar la conformidad a la identidad de género y manejar completa y adecuadamente las consecuencias que ésta misma puede tener en los diferentes ámbitos de la vida de la persona transgénero.

Francia se podría inspirar en la postura colombiana para establecer una reforma de la legislación o un cambio jurisprudencial, sin apoyarse en el derecho a la vida privada, sino en el interés superior del menor de edad para poder cambiar la postura actual.

Así mismo, como se pudo notar en ésta comparación, Francia tiene todavía mucho que cambiar para asegurar una modificación en el registro civil y asegurar un proceso sin discriminación hacia las personas transgénero. Por eso, se podría analizar, si es posible para la legislación francesa inspirarse en la

jurisprudencia colombiana para legislar adecuadamente la problemática anterior para preservar los derechos humanos de la persona transgénero.

Capítulo 3 -Una posible influencia del derecho colombiano para garantizar el derecho a la modificación del sexo.

En los marcos normativos y jurisprudenciales expuestos de Francia y Colombia, se puede observar que Colombia tiene una legislación más favorable hacia las personas transgénero. Gracias a esta comparación, se puede estudiar una posible influencia del derecho colombiano, lo cual podría permitir a Francia ser garantizar adecuadamente el derecho a la modificación del sexo en los registros civiles y documentos oficiales.

Esta comparación tiene sentido porque estos dos Estados son de construcción de derechos civiles y respetan los mismos principios constitucionales con la pirámide de Kelsen. En Colombia, los derechos civiles y administrativos fueron contruidos de acuerdo con un marco normativo francés importante. Entonces, el derecho francés tiene que enfrentarse a las mismas dificultades, como lo son los conceptos de la intangibilidad de los atributos de la personalidad.

Además, la una parte de la doctrina francesa desea una simplificación del acceso a la modificación del sexo en el registro civil. Por ende, es posible entrar a comparar las diferencias anteriormente establecidas y ver de qué manera el derecho colombiano se podría poner como ejemplo.

3.1- La accesibilidad al notario para el cambio de sexo.

En el decreto 1227 del 4 de junio de 2015, la ley colombiana dispone que la modificación se hace directamente ante el notario. Éste proceso está explicado en dicho decreto. Ésta disposición permite simplificar y proteger el derecho al cambio de sexo de manera más respetuosa de la voluntad de la persona. Lo anterior, permite garantizar el derecho a la modificación de manera más amplia, ya que los requisitos son menos pesados para el demandante.

Además, la doctrina se escribió en éste sentido para permitir las facilidades al cambio de sexo, y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Durante las propuestas para la modificación con el decreto del 2017 en el lado francés, una parte de la asamblea se inclinó en favor de la modificación solo con la solicitud, suponiendo una simple declaración del demandante ante el notario.

Sin embargo, por razones de uniformidad de decisión, Francia favoreció la demanda judicial, con el Tribunal de Gran Instancia, en el tribunal de primera instancia en materia civil en Francia. Este proceso es simplificado y abierto a todas las personas transgénero, no sólo transexuales, pero a la apreciación del juez, los demandantes necesitan recolectar ciertas pruebas, ya que, la declaración en sí misma no es suficiente para acceder a la modificación del sexo. El texto exige una colección de pruebas, sin que deba someterse a la prueba médica del cambio de sexo, sin embargo, puede entrar en consideración con el juez. Aparte de eso, la judicialización del proceso de cambio de sexo, alarga el tiempo del mismo, ya que el juez tiene que revisar la demanda y el proceso de

aceptación después de la sentencia; y en el caso de que sea favorable, se toma unos 15 días para poner en conformidad los registros civiles y documentos de identidad. Además, la apreciación de la aceptación está sometida a un juzgamiento, aunque simplificado, la decisión sigue siendo aleatoria. La jurisprudencia puede vislumbrar el camino, pero los casos siguen siendo diferentes y las apreciaciones pueden ser variables hasta que se realice un cambio real por la Alta Corte francesa sea realizado.

Al contrario, Colombia con su recurso al notario directamente permite simplificar los trámites. Primero, el reconocimiento a posteriori de la demanda es más rápida, ya que los documentos oficiales deben estar en conformidad después de los 5 días de la presentación de la demanda ante notario por el solicitante. Además, el acceso al notario permite dar un trámite mucho más rápido para la persona y simplificar el proceso de prueba. El acceso al notario resulta ser lógico, pero Francia lo limita por la intangibilidad de los atributos personales, sin embargo, como lo presentó Géraldine Delavaquerie (2018), citando V. Bellivier F. y Leroyer A.-M, los atributos de la personalidad son indispensables, pero no significa que sean inmutables. En este ejemplo, la modificación del domicilio es posible sin ningún control y la modificación del nombre es posible, aunque sean reguladas.

En este sentido, se puede analizar que la modificación del nombre, sea el nombre familiar o el nombre propio, es posible modificarlo solo con un proceso ante el notario en Francia. Adicional a lo anterior, para dicha modificación no se necesita de una judicialización en el caso de requerir dicho cambio. Para cambiar de nombre, solo se necesita probar un interés legítimo ante el oficial civil. Sin

embargo, el cambio de nombre autorizado para una persona transgénero es entonces reconocido como una demanda legítima. La Lettre des Notaires de France, periódico oficial de los notarios en Francia (2017), explica lo que puede consistir en éste interés legítimo, y la solicitud por un transexual en este caso puede ser aceptada, como interés legítimo. Sin embargo, el hecho de que la sociedad reconoce una persona, es decir sus familiares cercanos, o compañeros de trabajo reconocen una persona con otro nombre, permite también dar el interés legítimo a una persona trans, es decir transexual o transgénero sin ningún problema ya que la prueba sería establecida. Entonces, la sociedad puede legitimar dicha prueba ante notario y dar un interés legítimo. Respecto a la noción de interés legítimo, el único requisito solicitado ante notario y no de “consentimiento pleno e informado” permite facilitar los trámites. Entonces, esto convalida que el proceso podría ser también simplificado ante el notario.

Ahora bien, el derecho colombiano facilitó éste trámite con el acceso al notario para solicitar dicho cambio. Esta es la primera etapa de simplificación de la cual, el derecho francés se puede inspirar, ya que el papel del notario es similar en los dos países. Los dos son oficiales públicos del Estado y tienen un poder frente al registro civil, lo que sugiere que pueden permitir la modificación sin judicialización del proceso, y permitir un cambio acelerado y más respetuoso de los derechos propios, los cuales pueden ser considerados como derechos humanos por lo anteriormente establecido: el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la autonomía personal y a la vida privada, en el caso francés.

Gracias a este mecanismo, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia T-63 del 2015 demuestra que el recurso al notario permite garantizar una igualdad más significativa entre las personas transgénero y cisgénero. En efecto, en caso de error, una persona cisgénero, es decir nacido con el sexo correspondiente a su género al momento de nacer, solo necesita recurrir a la modificación por escritura pública. Eso crea un trato diferencial entre las partes que permitirían ser corregidos solamente con el acceso facilitado al notario. Lo mismo está pasando en Francia, en caso de error en el registro civil al nacimiento, interponer el recurso ante un notario es suficiente para solicitar el cambio. Lo anterior, permite inferir que el derecho francés puede inspirarse del derecho colombiano para garantizar una mejor igualdad entre los individuos.

Otro argumento en favor del recurso al notario se basa en que, según la sentencia T-63, la rapidez del recurso y un acceso facilitado al proceso respecto a los costos ahorrados de no tener que, obligatoriamente, hacer una solicitud ante un juez.

“ A corrección por vía notarial reduce los obstáculos y exclusiones que padecen las personas transgénero en razón de los mayores costos y tiempos de espera que supone el recurso a un proceso judicial, y que en sus particulares condiciones de marginación y exclusión se convierten en una carga especialmente dura de afrontar; asimismo, elimina la diferencia de trato que se establece entre personas cisgénero y transgénero, permitiendo a estas últimas hacer uso del procedimiento de corrección del sexo en el registro que hoy se admite para las primeras y contribuye a eliminar la tendencia hacia la

patologización de la identidad de género. Se trata, por tanto, de un medio menos lesivo en términos de afectación a derechos fundamentales.” (Párr. 7.2.6)

Como se puede ver, la opción de la jurisdicción voluntaria permite asegurar un mejor trato de los derechos humanos y asegurar los principios mismos de la protección de la libre personalidad, la cual, se puede asimilar a la autonomía personal, o a la vida privada y familiar en el caso francés. El recurso al notario es un medio alternativo y menos lesivo para la corrección del sexo en los registros civiles. La sola existencia de un medio alternativo permite ser más protector del cambio de sexo.

El derecho francés, nuevamente, puede apoyarse en el derecho colombiano, ya que éste último no desconoce la posibilidad de solicitar un juez, y éste mismo no está ajeno del todo de su papel de protector de los derechos y puede todavía permitir una línea de jurisprudencia. Solicitar el juez es entonces, todavía posible, pero como segunda opción. Es decir, que el recurso del juez sigue siendo posible, pero la opción del notario se constituye como un recurso, más accesible a mucha gente. El notario y el juez pueden ser complementarios, ya que se puede ver la línea jurisprudencial con el fin de identificar cuáles son las pruebas consideradas por el juez como suficientes para acceder a la demanda y validar el cambio.

Además, en cuanto al acceso igualitario a la justicia, el hecho de hacer un proceso puede crear una discriminación por recurso. La ley francesa con su decreto no obliga al solicitante a recurrir a un abogado. El Código de procedimiento civil en el artículo 1055-77 impone en acción civil, recurrir a un

abogado. Normalmente en el procedimiento civil, el recurso al abogado es la norma de primera instancia, y constituye una exigencia para poder hacer una acción civil. Sin embargo, con la norma francesa actual de reconocimiento de modificación del sexo en el registro civil, el proceso judicial tiene una forma particular, aunque simplificado en este caso, lo que puede considerarse como un límite a la demanda. La persona puede cometer errores de procedimiento lo que podría entonces, obligar al juez a rechazar la demanda, y a pronunciar la nulidad de la demanda por errores procesales. Si en los hechos, el recurso al abogado no es necesario por razones de procedimiento o de conocimiento, se vuelve implícitamente necesario utilizar los servicios de una persona con conocimiento legal para apoyar la solicitud del demandante. Es decir, la judicialización del proceso sigue en teoría, la simplificación con la posibilidad de recurrir al Tribunal de Gran Instancia. Sin embargo, si el domicilio del demandante es autorizado, y sin recurrir al abogado, la realidad demuestra que, para cumplir con los criterios procesales, la mayoría del tiempo es necesario recurrir a un abogado para no ver su demanda rechazada por razones procesales ya que la demanda debe ser “motivada y justificada”.

Alexandra Ternon, abogada titulada en derecho contencioso, en su artículo (2017) expone esta misma postura frente a la necesidad de recurrir a los servicios de un abogado. La abogada expone que, si el procedimiento es facilitado, tampoco es realmente tan fácil de cumplir y es casi sistemática la necesidad de un abogado. Actualmente, la modificación del sexo en la norma francesa permite bajar los costos procesales y permitir cierta accesibilidad, pero es más teórica que aplicable. Entonces, el criterio de accesibilidad impuesto por

la postura de la Corte Europea se ve indudablemente limitada. En este contexto, utilizar los criterios colombianos podría permitir cumplir nuevamente de manera plena con lo establecido en las decisiones europeas y asegurar una protección óptima de los derechos de los trans para la modificación de su registro civil y sus documentos oficiales.

En este sentido, la Asociación SOS homofobia (2017), apuntó este problema como un límite de acceso a la justicia por razón económica, lo que se convierte indirectamente en violación a un derecho humano, el de la no discriminación y el acceso a la justicia.

Por otra parte, la Asociación Nacional Transgénero expone que la limitación por la sentencia del juez crea una posibilidad de desigualdad o de discriminación frente a las decisiones, porque las pruebas son apreciadas por el juez, pero no son realmente definidas. Lo único realmente especificado resulta ser una recolección de éstas mismas que puede apoyar la demanda, pero no pueden ser considerado como pruebas realmente válidas para el juez. Lo anterior, supone entonces una apreciación particular y específica en cada decisión, por parte del juez, y por consiguiente, no hay una línea principal que determine la validez de las mismas. Adicionalmente, ni la jurisprudencia ni la ley aclararon de manera idónea en qué consisten dichas pruebas. Entonces, la asociación denuncia este criterio y se apoya en la declaración del Defensor de Derechos humanos quien promueve la ausencia de pruebas y la simple declaración. En su decisión marco MLD-MSP-2016-164, el Defensor explica que un proceso declarativo y rápido, transparente ante un oficial público, (como puede ser el notario), es el único medio totalmente respetuoso de los derechos

fundamentales de las personas transgénero, como los garantizados en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por eso mismo, los criterios colombianos resultan ser más favorables ante ésta recomendación por parte del Defensor de Derechos Humanos.

Como he presentado anteriormente, el notario tiene el mismo papel en la sociedad francesa y colombiana, se encarga de corregir las escrituras públicas. Entonces por lo anterior, la posibilidad de recurrir a los dos permite dar más protección a los derechos humanos en el sistema francés, al igual que en el derecho colombiano. El juez sigue siendo una opción, ya que es posible hacer uso del recurso de apelación en caso de ser rechazado el cambio por parte del notario en Francia, y como acto siguiente, puede ser posible instaurar una demanda con el juez.

Luego, se puede ver que no solo el notario permite asegurar una protección más fuerte del derecho a modificar el sexo como escritura pública, sino también que el derecho francés puede inspirarse en el sistema colombiano para garantizar los derechos humanos de las personas transgénero, respecto a la prueba que se requieran.

3.2- La prueba únicamente con la declaración del demandante.

La modificación de la ley del 2016 en Francia complementado por el decreto del 2017 sobre la modificación del sexo en los registros civiles fue una fuente importante de debates; por un lado, algunos miembros del Parlamento estuvieron en favor de la modificación solo con la solicitud de la persona transgénero, es decir, una simple declaración del demandante. Por lo tanto, en Francia, esta última reforma de la nueva ley de modernización de la justicia del

siglo XXI de 2016 hizo debatir la doctrina impuesta anteriormente. Dicha reforma argumentó ampliamente en favor de la modificación de sexo de manera simplificada. De acuerdo con un artículo titulado “Hacia una simplificación de la modificación de la mención del sexo en el registro civil para los transexuales”, por el editorial jurídico Legibase, en materia civil (2015), demuestra que una parte del hemicycle francés estaba en favor de la modificación simplificada.

También, hubo una crítica importante de la doctrina, como se ha indicado anteriormente con Roger Philippe (2018), el consentimiento libre e informado hace referencia al campo medical, aunque el avance importante de la nueva legislación francés fue la ausencia de medicalización como criterio de cambio. Esta referencia puede dar a confusión cuales son estas pruebas para declarar que un individuo tiene su “consentimiento libre e informado”.

Entonces, el solicitante tiene que recolectar unas pruebas por el hecho de encontrarse dentro de un sistema jurisdiccional. Se puede demostrar todo tipo de pruebas para consolidar la demanda, sin embargo, el simple hecho de solicitar pruebas puede dar una apreciación por el juez de lo que puede ser o no calificado como suficiente para lograr este cambio. La prueba médica no puede ser la razón principal para vincular la demanda, pero, el simple hecho de haberlo hecho facilita los trámites por la necesidad de dichas pruebas.

Se podría reflexionar sobre la noción de interés legítimo, como por el nombre que podría permitir una amplitud mayor en aras del acceso al cambio. No obstante, el interés legítimo, es una noción utilizada para el cambio de nombre, y dicha noción que se tiene que presentar ante notario, y no ante el juez.

Aparte de lo que facilita procesalmente el recurso al notario, este mecanismo podría entonces facilitar el acceso a la prueba. En efecto, en el sistema colombiano, lo único necesario para justificar el acceso a la modificación del sexo en el registro civil es Declaración realizada bajo la gravedad de juramento, con la copia de la cédula y copia del registro civil de nacimiento. La declaración bajo juramento permite evitar la necesidad de probar socialmente la validez de la modificación, y de someter este cambio a una apreciación de las autoridades para permitir este cambio y evitar la discriminación que se podría revelar en la variación de lo que podría ser considerado como visto, de interés legítimo, o de la noción de pruebas, de tener que calificar cual prueba sea considerada como suficiente. Eso se justifica con el decreto 1227 del 2015 y se prueba en el párrafo 2 del artículo No. 2.2.6.y 12.4.5. del decreto 1227 de 2015, que expone explícitamente “No se podrá exigir ninguna documentación o prueba adicional a las enunciadas en el presente artículo.” (párr. 86)

La ausencia de documentación aparte de la declaración que hace referencia a la construcción sociocultural de la identidad sexual de la persona permite evitar una diferencia de trato entre los notarios o en el caso francés, una variación entre las sentencias jurisdiccionales.

El sistema francés podría entonces inspirarse en el mecanismo enunciado anteriormente, ya que permitiría una uniformidad en los requisitos y declaración del cambio sin temer una línea diferente por parte de los notarios. La única necesidad de prueba con la declaración bajo juramento permite acceder de manera casi sistemática a la demanda del solicitante y permite evadir los efectos que puede dicha prueba, reconociendo la referencia ambigua de “consentimiento

libre e informado”, el cual, resulta ser muy polémico por su simple noción. Entonces, la necesidad de prueba puede menoscabar los derechos de las personas trans, porque eso alarga primero el proceso, por la colección de prueba, y también la calificación necesaria por el juez.

SOS homofobia (2017), asociación de lucha contra los atentados en contra de la población LGBTI, describió los riesgos de someter la demanda ante el juez, y por consiguiente, es posible inferir que es necesario determinar garantías más amplias que permitan la protección de los derechos de las personas transgénero. Por otra parte, la Corte Europea exige que la modificación del sexo se realice por medio de un proceso eficaz y accesible, respetando la autodeterminación desde el fallo Nicot contra Francia del 2016. Por otra parte, Francia puede inspirarse de Colombia, ya que, la última sentencia que falló a favor del Estado francés, disponía de los criterios de accesibilidad para efectuar la modificación del registro civil. En esta decisión, la Alta Corte Europea declara que el proceso debe ser lo más simple posible y tener una garantía de accesibilidad por parte del individuo. El Estado francés, a pesar de sus avances con el decreto del 26 de marzo de 2017, deja entrever que la necesidad de la prueba limita en gran parte lo que puede ser entendido como accesibilidad al proceso del cambio. Con el modelo colombiano, Francia podría cumplir plenamente con los principios establecidos en la decisión europea; en otras palabras, aplicar los criterios de la norma colombiana en el sistema francés permitiría cumplir con los criterios supra nacionales y asegurar una mejor garantía de los derechos de los transgénero.

Como consecuencia, el índice de “reunión suficiente de pruebas” puede

parecer inestable y en el ámbito de evitar las diferentes decisiones de los tribunales franceses, se puede utilizar el criterio del derecho colombiano de la declaración bajo juramento.

Adicional a lo anterior, el decreto 1227 hace referencia a la sección de la tarifa a correcciones de errores u omisiones del registro civil, lo que crea aún más una igualdad entre las personas trans y cisgénero ya que, el sexo establecido al nacimiento es considerado como un error, el cual, podría ser solicitado por un individuo cisgénero en caso de reconocer una irregularidad en su propio registro civil, y por consiguiente, no se habla de una modificación por cambio sino de corrección de error. En el mismo término de “error” justifica la ausencia de necesidad de prueba porque se insinúa que fue un error de la administración, por ende, no se tiene que probar la modificación.

La posición adoptada por Colombia puede ser una perspectiva interesante para Francia en aras de seguir en esta búsqueda de garantías, y mostrar un respeto más amplio frente a la voluntad de los individuos, sin embargo, la posición francesa busca justificarse por la intangibilidad de los atributos de la persona.

3.4- Una posibilidad de extender el derecho a los menores de edad.

La modificación del registro civil se vuelve cada vez más importante para asegurar los derechos de los transgénero. Se puede notar por el movimiento internacional de reconocimiento del cambio, pero unos países se adelantan particularmente en su legislación nacional, reconociendo incluso el derecho a modificar su registro civil siendo menor de edad. Es el caso de Portugal, con la ley de autodeterminación de identidad de género reformada el 7 de agosto 2018,

la cual establece la posibilidad de solicitar el cambio a los menores de edad, de 16 años, sin ser emancipados. El artículo 7 de la mencionada ley establece que los menores entre 16 y 18 años pueden solicitar el cambio mediante sus representantes legales después de proceder a una audición presencial con un médico o psicólogo del solicitante para obtener su consentimiento expreso, libre y esclarecido. Esta voluntad se puede establecer frente a los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño.

Por lo tanto, Colombia se incluye en este movimiento reformativo gracias a su posición judicial. En efecto la decisión constitucional T65 del 2017 establece la posibilidad de efectuar también este cambio. Por consiguiente, esta acción de tutela establece que el notario debe reconocer la modificación del menor, como si éste fuera un adulto, sin necesidad del acuerdo de los padres para proceder a la modificación. La Corte se apoya en la noción de autodeterminación que fue utilizado con los menores de edad intersexuales, que pueden decidir por ellos mismo según su edad, respetando su autonomía, permitiéndole al menor jugar un papel fundamental en su decisión y opinión al respecto. Se necesita el consentimiento del menor de edad para poder efectuar la modificación del sexo. La calificación del consentimiento del menor está definida en esta sentencia como “una voluntad comprometida del menor obedece a una decisión libre, informada y cualificada.”(párr. 19)

El interés superior del niño prevalece en este contexto porque:

“su garantía prevalecerá frente a la existencia de otros intereses que puedan entrar en conflicto, por lo que todo ejercicio de ponderación deberá guiarse por la protección de este postulado prevalente; y finalmente porque el

desarrollo sano e integral de la personalidad del es un objetivo constitucional y un interés jurídico supremo.” (párr.20)

Finalmente, la Alta Corte declara que limitar la modificación de cambio de sexo al menor es una limitación innecesaria desproporcionada y por ende inconstitucional de sus derechos fundamentales, en este caso prevalece las capacidades evolutivas de los niños y adolescentes para expresar su consentimiento respecto al cambio de su identidad de género, con la plena garantía que la sociedad y el Estado respeten tal decisión. La autonomía del niño puede ser suficiente y razonable para utilizar la vía notarial para efectuar el cambio, parece el medio más proporcionado para preservar los derechos fundamentales.

Si se puede justificar el método judicial para verificar los criterios del consentimiento libre e informado en el caso de los menores, entonces, es posible hacer de esta regla un principio sin excepción es una apreciación desproporcionada. Es decir, que un menor de edad puede solicitar la vía notarial y se debe hacer una apreciación particular frente al caso. El notario no puede rechazar la demanda por el solo criterio de ser menor de edad, sino que tiene que analizar cada solicitud en particular para determinar si recurrir al notario es posible o si se tiene que presentar ante el tribunal.

Hasta ahora, Francia no ha instaurado ninguna norma respecto a los menores de edad para modificar el sexo en el registro civil. Al parecer, según los criterios del decreto actual, el cambio no parece posible para los menores en ninguna circunstancia. Se puede explicar porque el derecho a la autodeterminación es visto determinante para los transgénero según la Corte

Europea. Ahora, este criterio sigue principalmente limitado sobre todo respecto a los menores de edad. A contrario de la Corte Europea, Francia no tiene un principio escrito de la autodeterminación en su legislación nacional.

No obstante, Francia podría inspirarse de los criterios colombianos para dar una oportunidad a los menores de edad, considerando su posición particular, tomando en cuenta el interés del niño, principio que existe igualmente en el derecho francés. Lo anterior con el fin de abrir las puertas por medio de legislaciones que reconozcan a los menores de edad con el fin de evitar discriminaciones hacia las personas transgénero ya que es posible justificar dicha necesidad debido a que es una población considerada vulnerable, es decir más susceptible de verse afectadas por discriminación. Tratar de elaborar una norma podría poner fin al el vacío jurídico actual para los menores de edad y establecer unos criterios equitativos que permitan una protección de sus derechos humanos frente a la condición particular del menor. Los criterios del decreto del 2017 de consentimiento libre e informado, podrían en este caso parecer justificados para los menores, con el fin de consolidar la real voluntad del menor de efectuar este cambio. Al mismo tiempo, estos requisitos también permiten proteger el interés del niño, pero su derecho a la vida privada y familiar, permitiendo ver su sexo conforme al género con el cual se identifica. Asimismo, los criterios del actual decreto francés del 2017 pueden dar esta oportunidad para los menores de edad.

Para ser cada vez protector de los derechos de las personas trans, abrir las puertas a la posibilidad de efectuar el cambio por vía notarial, incluso a los menores, lo que permitiría consolidar los criterios de procedimiento de la Corte

Europea con la exigencia de transparencia y accesibilidad por lo establecido anteriormente, respecto a los costos o tiempos que pueden tener en el medio jurisdiccional.

Conclusiones

El movimiento internacional demostró una voluntad y una recomendación de reconocer y limitar las discriminaciones hacia la población LGBTI, y en particular hacia las personas transgénero. Este movimiento está particularmente en favor, como se puede ver, de las normas internacionales, y del trabajo jurisprudencial y normativo de los sistemas regionales. El derecho a reconocer el sexo deseado, sentido por la persona, es un derecho considerado fundamental gracias a los movimientos legales. En esta misma ola, se puede notar que la legislación colombiana está avanzada en los ámbitos de reconocimiento de Derechos Humanos. Este progresismo se nota incluso en la rama procesal.

Para concluir esta reflexión académica de derecho comparado, se puede ver que Colombia tiene un sistema bastante avanzado en materia de derechos de las personas transgénero. El modelo de la Constitución de 1991 permitió dejar un espacio libre y reconocer la posibilidad de la modificación del sexo en los registros civiles y documentos oficiales. El recién emitido decreto 1227 implementó un reconocimiento casi absoluto del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito de las personas transgénero. Del lado procesal, fue aún más respetuoso motivado por una postura favorable, por parte de la Corte Constitucional Colombiana, impulsando cada vez más a velar por el respecto de los derechos humanos de la población LGBTI. Los fallos anteriores al decreto 1227 resultaban ser favorables a la solicitud del notario para proceder al cambio,

ya que es considerado como un medio menos lesivo de los derechos humanos, y permite sin necesidad de pruebas llegar al cambio exigido por la persona trans. Aparte de eso, la Alta Corte persigue este movimiento positivo en aras de asegurar el cambio. Se puede notar que, con la posición de 2017, se busca permitir el cambio a menores de edad con ciertas condiciones, en éste caso, bastante flexibles y permitir el debido proceso ante el notario, el cual es considerado como el medio menos lesivo, con el fin de velar por la protección de los derechos humanos.

Por otro lado, el modelo francés parece mucho más conservador y preservador de su principio de intangibilidad, sin embargo, se puede notar un esfuerzo legislativo desde el nuevo decreto del 2017, el cual, argumenta sobre la modificación del nombre y sexo en el registro civil y los documentos oficiales. De manera paralela, la judicialización, la condición de prueba y el vacío jurídico para los menores de edad afectan éste progreso legislativo; o bien, no soluciona los problemas que pueden involucrar esta nueva norma con la filiación debilitando la puesta en marcha de la norma actual.

Asimismo, la norma colombiana permite demostrar cómo los principios existentes en los dos derechos civiles pueden ser mantenidos, pero garantizando de manera mucho más amplia el derecho a cambiar el sexo en los documentos oficiales, presentado ante el notario, la declaración bajo juramento como única documentación necesaria a la demanda. El modelo colombiano permite complementar y limitar la posibilidad de un vacío jurídico debido a sus conceptos actuales y progresivos los cuales preservan el orden público, objetivo fundamental de los Estados.

Referencias Bibliográficas:

Association Nationale Transgenre. (2019). *Le changement d'Etat Civil*. Recuperado de <https://ant-france.eu/index.php/accueillir-informer-defendre/assumer-son-genre/changement-etat-civil/>

Brillé-Champaux M.(2019). La notion de « parent biologique ». *Edition Dalloz*. Recuperado de <https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/la-notion-de-parent-biologique/h/6337f8effcb30d64254292065749ba3d.html>

Corte Constitucional Colombiana, Sala Novena de Revisión (26 de abril de 2016). Sentencia T-196/16. [M.P. Luis Vargas] T-5.307.214.

Corte Constitucional Colombiana, Sala Tercera de Revisión (15 de noviembre de 2017) Sentencia T-675/17. [M.P. Alejandro Linares] T-6.269.913.

Corte Constitucional Colombiana, Sala de Quinta de Revisión (29 de febrero de 2015) Sentencia T-099/2015. [M.P. Gloria Ortiz] T-4.521.096.

Corte Constitucional Colombiana, Sala Séptima de Revisión (3 de agosto de 2017) Sentencia T-498/17 [M.P. Cristina Pardo, Alberto Rojas, Diana Fajardo] T-6.090.451.

Constitución Política [Const.] (1991) 2da ED, Legis.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1068 de 2015, único reglamentario del sector de justicia y de derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el registro de estado civil. [Decreto 1227 de 2015]. D.O. 49532.

Comité de los Ministros. (2010). Recomendación sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Recuperado de <https://rm.coe.int/16804e509d>

Convención Interamericana de Derechos Humanos. (1969). Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de

<https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/actas-conferencia-interamericana-Derechos-Humanos-1969.pdf>

Consejo de Europa. (2016). Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre.

Recuperado

de

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168062fa15>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión consultativa OC-24/17.

Recuperado

de

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Delavaquerie G. (2018). Vers une disparition du sexe juridique. Regard sur le sexe comme élément de l'état des personnes. *Les petites affiches, La gazette du Palais*. Recuperado de <https://etudiant.lextenso.fr/article-à-la-une-famille/vers-une-disparition-du-sexe-juridique-regard-sur-le-sexe-comme-élément-de>

Francia, Código Civil Francés. (1804) consolidado en julio 2019.

Francia, Corte de Apelacion de Montpellier, Tribunal de Casación Francés (2018). Sentencia n° 16/06059.

Francia, Tribunal Defensor de Derechos Humanos, (24 de junio de 2016), « Décision MLD-MSP-2016-164 du 24 juin 2016 relative à la mise en œuvre d'une procédure déclarative de changement de la mention du sexe à l'état civil », Jacques Toubon, Paris.

Francia, Decreto n° 2017-450. (29 de marzo de 2017). Relativo a los procedimientos del cambio de nombre y modificación de la mención del sexo en el registro civil, publicado en el *JORRF n° 0077 du 31 mars 2017*.

Francia, Parlamento Francés. (18 de noviembre de 2016) Artículo 56. [Título I]. Ley N° 2016-1547 de modernización de la justicia del siglo XXI [Ley 1547 de 2016]. *JORF n° 0269 del 19 de noviembre del 2016*.

Legibase. (2015). Vers une simplification du changement de la mention de l'état civil pour les transsexuels ? Recuperado de <https://etat-civil.legibase.fr/actualites/evenement/vers-une-simplification-du-changement-de-la-64270>

Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. (1994). Caso Coeriel et al. Vs. Holanda, CCPR/C/52/D/453/1991.

Naciones Unidas. Consejo de los Derechos Humanos. (14 de junio de 2011). Resolución A/HRC/RES/17/19. Orientación sexual e identidad de género.

Naciones Unidas. Principios de Yogyakarta. (2007). Sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derecho civiles y Políticos. Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

Notaires De France. (novembre de 2017,). Nom et Prénom : Comment changer ? *La Lettre des Notaires de France*. N°85.

Oficina del Alto Comisionario de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, (2013). Orientación sexual e Identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Recuperado de <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf>

Portugal, Assembleia da Republica, (2017, 7 de agosto), Lei n.º 38/2018, en publicado Diário da República n.º 151/2018, Série I de 2018-08-07, Lisboa.

Roger Philippe, R. P. (2018). Une brève histoire du changement de sexe à l'état civil en France ». Recuperado el 31 de agosto de 2019, de <https://www.eurojuris.fr/articles/changement-de-sexe-a-l-etat-civil-37515.htm>

SOS Homophobie. (2017). *Décret sur le changement d'état civil des personnes trans: on est encore loin du changement d'état civil entièrement libre et gratuit !*. Recuperado de <https://www.sos-homophobie.org/article/decret-sur-le-changement-d-etat-civil-des-personnes-trans-est-encore-loin-du-changement-d>

Ternon A. (2017). Le changement d'Etat civil pour les personnes transgenre: une importante évolution? .*Legavox*. Recuperado de <https://www.legavox.fr/blog/maitre-alexandra-ternon/changement-etat-civil-pour-personnes-24181.htm>

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. (11 de julio de 2002). Sentencia 28957/95, Goodwin contra Reino Unido.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (26 de enero de 2019). Sentencia N° 29683/16.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (abril 6 de 2017). Sentencias N° 79885/12, 52471/13 y 52596/13. A.P,Nicot, y Garçon contra Francia.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (marzo 10 de 2015). Sentencia N° 14793/08 Y.Y contra Turquía.

Vialla, F. (2012). Transsexualisme : l'irréversibilité en question. *Recueil Dalloz* 2012. p1648. Recuperado de https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MARS_2015/D2012-1648.pdf